

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, proceden dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310500320080121301, promovido por la señora **JUANA MARÍA GÓMEZ PALACIO** contra **J.&E. TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A, SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y en donde se integró al litigio por pasiva a **XM COMPAÑÍA EXPERTOS EN MERCADO S.A.**, a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia parcialmente condenatoria emitida el 29 de agosto del año 2014 por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante

providencia escrita número **072**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, se solicitó el reintegro de la trabajadora, y la ineficacia del despido del que fue objeto, con el pago de las prestaciones sociales que se causen hasta la efectividad de la reincorporación, pago de los salarios de la última quincena, la sanción moratoria del art 99 de la ley 50 de 1990 por no consignar las cesantías en un fondo, la indexación de las condenas, o de manera subsidiaria se cancele el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del C.S.T. por el no pago de las prestaciones sociales finales, sanción por no pago de las cesantías, gastos y costas del proceso.

Para fundamentar sus pretensiones expuso, que laboró para el servicio de la empresa de servicios temporales nuevo Milenio S.A. desde el 4 de diciembre de 2007, como trabajadora en misión, prestando sus servicios en la empresa XM S.A. en el cargo de analista, con un salario de \$2.132.000 mensuales, y para el 3 de marzo de 2008 fue despedida sin justa causa de manera verbal, recibiendo solo hasta el 5 de marzo del año 2008 misiva al respecto. Narró que la razón para dar por terminada la relación laboral, fue la culminación de la labor para la cual, sería contratada, empero, la realidad, fue que la empresa usuaria del servicio XM S.A. tuvo conocimiento que la empleadora no estaba pagando los aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores enviados en misión y por ende, no podían seguir prestando servicios. Expuso, que el 12 de febrero del año 2008, la señora Gómez Palacio remitió escrito a su empleador solicitando se aclarara dicha situación, pero la respuesta solo fue el despido.

Se argumentó en la demanda que, a la terminación de la relación laboral, no le fue remitido la certificación de que trata la ley 789 de 2002, en donde consta que la empresa se encuentra a paz y salvo en sus aportes al sistema ni parafiscales. Explicó que la ley 50 de 1990 exigió a las empresas temporales constituir una póliza de seguros que garantice el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores

en misión la que se suscribió con Seguros del Estado S.A., de la cual, la demandante obtuvo copia mediante petición elevada al ministerio del Trabajo. Expuso que para el momento de vigencia de la póliza se encontraba vigente la relación laboral con J&E Temporales Nuevo Milenio.

Admitida la demanda, entendiéndose a la pasiva Seguros del Estado como una Llamada en garantía por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, se notificó la demanda a los extremos litigiosos, quienes dieron respuesta así:

Seguros del Estado, expuso desconocer los hechos que giraron en torno de la relación laboral, y expresó, que el despido fue legal, justo y si versó sobre la finalización de la labor contratada, sin que existiera obligación solidaria con su prohijado, pues la póliza a la que se hace referencia, se rige por el Decreto 4369 de 2006 y su competencia es exclusiva del Ministerio de Seguridad Social e indicó, que de solicitarse solidaridad con el beneficiario de la labor, será la empresa XM Expertos en Mercadeo SA, quien debería ser llamada al proceso para ello, por lo cual, interpuso excepción previa al respecto, que salió avante. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones de mérito que denominó: *“Inexistencia de presupuestos legales para la afectación del contrato de seguros”, “Riesgos Excluidos del contrato de seguro”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “El asegurador no es deudor solidario de la empresa de servicios temporales”*.

J&E Temporales Nuevo Milenio S.A., fue notificada mediante curador ad-litem en aplicación a lo dispuesto en el artículo 29 del C.P.T. Y S.S., por lo que, enunció en la contestación no constarle los hechos narrados en el libelo de demanda, e interpuso las excepciones de mérito que denominó: *“Prescripción”, “Genérica”*.

En diligencia del 22 de mayo del año 2013, audiencia del artículo 77 del C.P.T. Y S.S., se resolvió citar en calidad de Litis consorte necesaria por pasiva a la empresa XM S.A. E.S.P, quien una vez notificada contestó la demanda explicando que la unió con la empresa J&E Temporales Nuevo Milenio SA un contrato con la finalidad de suministro de personal temporal para las actividades relacionadas por análisis posoperativo con énfasis en el análisis de desempeño y actuación de

protecciones en los eventos presentados por en “SIN”, contrato, con una duración de tres meses, desde el 4 de diciembre de 2007 al 4 de marzo de 2008, pero que el 15 de febrero de 2008 se culminó ante el incumplimiento de la empresa temporal de efectuar el pago oportuno y completo de los aportes en seguridad social de sus empleados. Explicó que la aquí demandante hizo parte de dicho contrato para atender un incremento puntual en la prestación de los servicios, causal establecida en la ley 50 de 1990 y en el Decreto 4369 de 2006, y arguyó que la naturaleza del contrato se debió solo de manera temporal con la empresa J&E Temporales Nuevo Milenio S.A., por lo cual, no le constan los hechos narrados respecto a la relación laboral.

Se opuso por tanto a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las excepciones de *“prescripción”, “Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”*

En sentencia del 29 de agosto del año 2014, el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión, despachó desfavorablemente la pretensión de ineficacia del despido con sus consecuenciales, y condenó a la demandada J&E Temporales Nuevo Milenio S.A., a pagar a la demandante un día de salario por cada día de retardo en sufragar los aportes parafiscales, así como la sanción del artículo 65 del CST hasta que se pague la liquidación de prestaciones sociales de la demandante, así como la suma de \$1.279.206 como salarios adeudados a la terminación de la relación laboral y absolvió a de las demás pretensiones invocadas en el proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante en término, presentó escrito de apelación, en el cual, expuso estar en desacuerdo con la absolución dada a Seguros del Estado S.A. como garante de las obligaciones incumplidas por la empresa de Servicios Temporales, pues dice, que el trabajador en misión puede activar la efectividad de la póliza, al existir mora en el pago de los aportes en seguridad social, y mediante Resolución número 00718 de 30 de marzo de 2009 se declaró la iliquidez de la empresa de servicios temporales, reuniéndose los requisitos del Decreto 4369 de 2006.

Explicó de igual forma que es competente el juez laboral, para decidir afectar la póliza de garantía tomada por la Empresa de Servicios temporales, ya que el mismo despacho al momento de dirimir la excepciones previas expuso que la competencia funcional emana de la actividad judicial, pues se dijo, que era el Ministerio el encargado de realizar el pago correspondiente de mediar orden, por lo cual, expone, no es coherente que se haya expuesto en sentencia que el trámite es meramente administrativo, ya que indica, no es ése el único mecanismo para lograr el pago de esas acreencias, siendo necesario que el juzgador evalúe el cumplimiento de los presupuestos para el pago y que la reclamación previa, no era requisito procedimental pues no se encuentra en el artículo 6 del C.P.T. Y S.S

.

Finalmente, solicita el reconocimiento de los intereses de mora establecidos en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, argumentando que dicha pretensión no fue estudiada de fondo por la falladora, pese a que se acreditó la mala fe en el pago de las acreencias laborales y se ordenó la sanción del artículo 65 del CST.

Corrido el traslado para alegar, la parte accionada XM Compañía Expertos en Mercado SA, expuso que, solicita sea confirmada la sentencia proferida el primera instancia, pues entre su prohijada y la demandante no existió relación laboral alguna que los uniera, expuso que de los testimonios recibidos en audiencia no se pudo constatar relación laboral alguna, igualmente que está acreditado en el proceso que se dio por terminado el contrato de prestación de servicios temporales, por el incumplimiento de la obligación legal y contractual de efectuar el pago completo y oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral de algunos trabajadores en misión entre ellos, la demandante, sin que en el proceso sea posible el estudio respecto al artículo 34 del C.S.T. Y S.S., pues arguye haber reportado el incumplimiento de la empresa de servicios temporales ante el entonces Ministerio de la Protección Social conforme el Decreto 4369 de 2006.

Las demás partes del proceso no hicieron pronunciamiento.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar si en el presente caso, si es procedente la afectación de la póliza suscrita entre J&E Temporales Nuevo Milenio SA y Seguros del Estado, con el fin de amparar las condenas impuestas en primera instancia, y si es procedente la sanción establecida en el artículo 99 de la ley 50 de 1990.

CONSIDERACIONES

Frente al recurso promovido, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

En el transcurso del proceso no fue objeto de debate que la relación laboral hubiere sido exclusivamente con J&E Temporales Nuevo Milenio SA, siendo causa principal de reparo por la parte actora, la negativa de la juez de primera instancia en hacer efectiva la póliza suscrita entre el empleador y Seguros del Estado, para lo que, debe entrarse a revisar lo siguiente:

El artículo 77 de la ley 50 de 1990, explicó que las empresas de servicios temporales, como la aquí demandada son aquellas que, contratan la prestación de servicios con terceros que se benefician de esa laboral de manera transitoria en el desempeño de las actividades, por ello, establece los siguientes lineamientos:

(1) la ejecución de las labores ocasionales, transitorias o accidentales de las que trata el artículo 6.º del Código Sustantivo del Trabajo; (2) para reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad, y (3) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses, prorrogable hasta por un periodo igual.

Esta contratación se encuentra plenamente acreditada y aceptada en el proceso, pues la empresa usuaria del servicio alega que ello debió a un incremento transitorio, acudiendo a los servicios de J&E Temporales Nuevo Milenio S.A.

Es así pues como el tiempo en el que se encuentran en la empresa beneficiaria debe ser limitado. Sin embargo, la misma normativa también enunció con claridad los requisitos que debían tener dichas empresas así:

“Art. 82. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobará las solicitudes de autorización de funcionamiento a empresas de servicios temporales que cumplan con los requisitos exigidos en esta ley.

Art. 83. Para efecto de la autorización contemplada en el artículo anterior, a las solicitudes se deben acompañar los siguientes requisitos:

(...)

Constituir una garantía con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en favor de los trabajadores de la respectiva empresa, en cuantía no inferior a quinientas (500) veces el salario mínimo mensual vigente, para asegurar salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de los trabajadores, en caso de iliquidez de la empresa. La póliza correspondiente debe depositarse en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el cual podrá hacerla efectiva por solicitud de los trabajadores beneficiarios de la garantía. La cuantía de esa garantía debe actualizarse anualmente, tomando como base las modificaciones al salario mínimo legal vigente.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá exigir una cuantía mayor cuando así lo amerite el número de trabajadores en misión vinculados a la empresa de servicios temporales.

Una vez cumplidos los anteriores requisitos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorizará el funcionamiento de la respectiva empresa de servicios temporales, mediante resolución motivada.

Con el fin de regular la garantía requerida, el Decreto 4369 de 2006 estableció:

Artículo 7°. Trámite de autorización. La solicitud de autorización de funcionamiento de la Empresa de Servicios Temporales deberá ser presentada por su representante legal, ante el funcionario competente de la Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social del domicilio principal, acompañada de los siguientes documentos:

(...)

Póliza de garantía, conforme se establece en el artículo 17 del presente decreto.

(...)

El Ministerio de la Protección Social se abstendrá de autorizar el funcionamiento de la Empresa de Servicios Temporales, cuando no se cumpla con alguno de los requisitos señalados en el presente artículo; cuando algunos) de los socios, el representante legal o el administrador, haya pertenecido, en cualquiera de estas calidades a Empresas de Servicios Temporales

sancionadas con suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento, en los últimos cinco (5) años.

(...)

Artículo 11. Constitución de póliza de garantía. Las Empresas de Servicios Temporales están obligadas a constituir una póliza de garantía con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de los trabajadores en misión, para asegurar el pago de sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en caso de iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales, la cual deberá depositarse en el Ministerio de la Protección Social.

...

Artículo 17. Póliza de garantía. La póliza de garantía deberá constituirse en cuantía no inferior a quinientas (500) veces el salario mínimo legal mensual vigente, para asegurar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores en misión, en caso de iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales.

Dicha póliza deberá actualizarse anualmente, tomando como base las modificaciones al salario mínimo legal mensual vigente.

El funcionario competente de la Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social, ordenará a la Empresa de Servicios Temporales, mediante acto administrativo debidamente motivado, reajustar el valor de la póliza de garantía, aplicando la tabla de valores que elabora el Ministerio de la Protección Social, a través del Viceministerio de Relaciones Laborales, con base en los siguientes parámetros:

Hasta 150 trabajadores 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De 151 a 200 trabajadores 600 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De 201 a 250 trabajadores 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De 251 a 500 trabajadores 1.100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De 501 a 750 trabajadores 1.600 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De 751 a 1.000 trabajadores 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Parágrafo 1°. Para efecto de determinar el número de trabajadores en misión, se contabilizarán tanto los del domicilio principal de la Empresa de Servicios Temporales como los de sus sucursales.

Parágrafo 2°. La póliza de garantía deberá constituirse por un año. Se entiende por anualidad, el lapso comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. En consecuencia, la primera póliza de garantía debe actualizarse durante el mes de enero del año inmediatamente siguiente a la fecha de la resolución que autoriza su funcionamiento.”

Respecto a la efectividad de esta póliza, se explicó en el mismo texto normativo lo siguiente:

ARTICULO 2.2.6.5.18. Efectividad de la póliza de garantía. La póliza de garantía se hará

efectiva a solicitud de los trabajadores en misión, cuando la Empresa de Servicios Temporales se encuentre en iliquidez la cual se presumirá, sin necesidad de estudios económicos, cuando ocurra uno o más de los siguientes eventos:

- 1. Que el funcionario competente del Ministerio del Trabajo compruebe que, por razones de iliquidez, la Empresa ha incumplido en el pago de dos o más periodos consecutivos de salario, de acuerdo con lo establecido en el contrato de trabajo.*
- 2. Que exista mora en el pago de los aportes a la seguridad social por más de cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de la cancelación de la autorización de funcionamiento de que trata el artículo 3° de la Ley 828 de 2003.*
- 3. Que durante más de tres (3) ocasiones en una anualidad, exista mora en el pago de aportes a la seguridad social.*
- 4. Que la Empresa de Servicios Temporales entre el proceso de acuerdo de reestructuración de obligaciones*
- 5. Que la Empresa de Servicios Temporales se declare en estado de iliquidez.*

Cuando un grupo de trabajadores presente queja formal por presunta iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales, el funcionario competente solicitará a la Coordinación del Grupo de Relaciones Individuales y Colectivas de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, que realice el correspondiente estudio económico y determine dentro de los treinta (30) días siguientes, si se encuentra o no en estado de iliquidez.

Determinado el estado de iliquidez, sea por la ocurrencia de uno de los hechos descritos en el presente artículo o a través del estudio económico, el funcionario competente procederá por solicitud de los trabajadores en misión, a hacer efectiva la póliza de garantía, mediante acto administrativo que declara el siniestro y ordenará directamente a la compañía de seguros realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, con base en las liquidaciones que para el efecto el Inspector de Trabajo del lugar donde se prestó el servicio.”

No cabe duda, que la misma norma cuenta con el procedimiento especial, para la efectividad de la póliza que se solicita y si bien *a priori* se resolvió en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. Y S.S. la excepción que se tomó como previa de “Inexistencia de Requisitos formales para la afectación de la garantía” de manera negativa a la aseguradora, también lo es que, dicha decisión fue apelada, y en auto de 30 de septiembre del año 2013, la Sala Cuarta Dual de Descongestión Laboral de esta Corporación definió que dicha excepción no se encontraba enmarcada en los presupuestos de las excepciones de mérito que buscan atacar de forma el escrito genitor y no una resolución de fondo en la misma, incluso, se explicó en dicho momento: “por otro lado se debe advertir, es que en la sentencia se resuelven las relaciones que existen entre llamante y llamado, siempre y cuando el primero sea responsable el pago de la obligación sólo en ese instante, se estudiará la procedencia del llamado”, es así pues, como se resolvió que dicha situación se definiría de fondo y no, como excepción previa, sin

que se dijera, como lo entendió la parte actora, que indudablemente se era competente para resolver el asunto, pues se aclaró que se confirmaba la decisión de declarar no probada la excepción por razones diferentes, tal es así, que el Ministerio del Trabajo como ente encargado de llevar cabo el procedimiento descrito en el artículo 18 NO fue parte en el presente proceso.

Ahora, si bien no es competencia de este despacho ordenar la efectividad de la póliza a favor de la demandante, es importante precisar, que el artículo 18 del Decreto 4369 de 2006 se aplica ante la iliquidez de la empresa contratante, situación que se constata del certificado de existencia y representación legal de la pasiva, donde se observa que en la Resolución 00718 emitida por el Ministerio de la Protección Social de 30 de marzo del año 2009 se declaró la iliquidez de J&E Temporales Nuevo Milenio Sociedad Anónima, momento desde el cual, se podía denunciar el siniestro para la efectividad de la póliza de garantía suscrita con Seguros del Estado, y ante el cual, hubiere alcanzado la actora iniciar el proceso respectivo.

En tal sentido, se confirmará la absolución dada en primera instancia, pues el trámite respecto a la aseguradora debe resolverse ante ente diferente.

Respecto a los intereses del artículo 99 de la ley 50 de 1990, objeto de reparo por el apelante, la Sala de casación Laboral, ha precisado, que la imposición no tiene aplicación automática, pues la buena fe demostrada del empleador es suficiente para eximir de ello.

Igualmente, en sentencia SL 194 de 2019, refirió que es el empleador quien finalmente tiene la carga de demostrar que actuó sin intención fraudulenta, lo cual, había sido objeto de pronunciamiento en sentencia de radicación N° 32.416 de 2010 y en la SL 11436 de 2016, cuando refirió:

“Por lo demás, cabe anotar que si bien es cierto en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia esta Sala de la Corte consideró que, de cara a la imposición de la sanción por mora en el empleador incumplido existía una presunción de mala fe, ese discernimiento no es el que en la actualidad orienta sus decisiones, porque, pese a que mantiene su

inveterado y pacífico criterio sobre la carga del empleador para exonerarse de la sanción por mora, de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe, considera que ello en modo alguno supone la existencia de una presunción de mala fe, porque de las normas que regulan la señalada sanción moratoria no es dable extraer una presunción concebida en tales términos, postura que, ha dicho, se acompasa con el artículo 83 de la Carta Política.”

No está de más recordar, que la sanción moratoria consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, tiene lugar siempre y cuanto subsista la relación laboral y sólo hasta la fecha de culminación de esta, pues terminada la relación contractual entre las partes, lo procedente es, la sanción contemplada en el artículo 65 del CST, como lo detalló la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL859-2021:

“En consecuencia, respecto a las cesantías causadas durante el periodo laborado en el año 2012, no tiene razón la recurrente al invocar la imposición de la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 hasta la fecha en que se satisfaga la obligación, porque como ya se explicó corre solo hasta la data de terminación del contrato, de manera que lo que procede a partir de esta última, es la indexación de los dineros que por tal concepto debieron consignarse oportunamente, en cuanto, se repite, no se pretendió la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo.”

No es dable en el presente asunto predicar que existió buena fe en el actuar de la empresa accionada, puesto que, no hay explicación alguna al respecto de su actuar omisivo. Ahora, la relación laboral tuvo su inicio el 4 diciembre del año 2007, por lo cual, para el 15 de febrero del año 2008 se debió consignar las cesantías correspondientes al año 2007 de manera proporcional en el fondo de elección de la demandante, ello sobre las que se causaron para el 31 de diciembre de ese año de manera proporcional, sin que así se hubiere hecho, por lo que, se causó la sanción solicitada desde dicha fecha y hasta el 3 de marzo de 2008, extremo final de la terminación de la relación laboral conforme lo indico la juez de primera instancia, teniéndose para ello un total de 17 días de mora, que en atención al

salario expuesto en el contrato de trabajo, \$71.066 por día, para una sanción moratoria del artículo 99 de la ley 50 de 1990 en cuantía de \$1.208.122 pesos.

En consecuencia, se **confirmará y complementar** la sentencia, proferida por el juzgado Sexto Laboral de Descongestión el 29 de agosto del año 2014.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Complementar la sentencia, en el sentido de condenar a J&E Temporales Nuevo Milenio S.A a pagar a favor de la señora Juana María Gómez Palacio la sanción moratoria del artículo 99 de la ley 50 de 1990 en cuantía de \$1.208.122 pesos.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**. Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **61fbb4c35140905cfab790ac1a03d94a663946962ef906e4ee232ffdcaba474f**

Documento generado en 23/03/2023 02:26:02 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>